pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«Visto el recurso de alzada interpuesto por doña Ana María Fernández Torres en nombre y representación de la entidad "Habitad", contra Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria en Málaga, de fecha 7 de enero de 1999, recaída en expediente sancionador núm. PC-89/99.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Como consecuencia del expediente instruido reglamentariamente, se dictó la Resolución que ahora se recurre, en la que se sanciona a la empresa citada con sanción de seiscientos un euros con un céntimo (601,01 €) o lo que es lo mismo, cien mil pesetas (100.000 ptas.), considerándose con base a los hechos y fundamentos jurídicos que se recogen en la Resolución recurrida que existía responsabilidad por infracción prevista y calificada de falta leve sancionable en el artículo 34, apartados 9 y 10, y artículo 35 de la Ley 26/84, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, modificada por la Ley 7/98, de 26 de abril, y los artículos 3.2.6 y 6.4 del Real Decreto 1945/83, de 22 de junio, y ello en relación con lo dispuesto en los párrafos II.14, III.15, y III.17 de la Disposición Adicional Primera, añadida a la Ley 26/1984 por la Ley 7/1998, antes referenciadas.

Segundo. Contra dicha Resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de alzada, en el que la recurrente alegó lo que a su derecho estimó oportuno.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, por delegación del Excmo. Sr. Consejero, para conocer y resolver el presente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías; el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación, modificado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo, así como la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se delegan competencias en diversas materias en los órganos de la Consejería.

Segundo. Se considera prioritario, para la resolución del recurso planteado, el análisis acerca de la caducidad del expediente, cuestión que debe analizarse de oficio. En el artículo 18 del R.D. 1945/1983, por el se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de producción agro-alimentaria, se contemplan dos tipos de caducidad que se corresponden a las previstas en los apartados 2 y 3 del citado artículo. Este último dispone: "Iniciado el procedimiento previsto en los artículos 133 a 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo (debe entenderse actualmente la referencia hecha a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), y transcurrido seis meses desde la notificación al interesado de cada uno de los trámites previstos en dicha Ley, sin que se impulse el trámite siguiente, se producirá la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones, salvo en el caso de la resolución, en que podrá transcurrir un año desde que se notificó la propuesta."

Teniéndose en cuenta que el objetivo de la caducidad no es otro que intentar evitar la inactividad administrativa, y con el objeto de averiguar si en este expediente ésta se ha producido, habrá de computarse el plazo transcurrido entre

la notificación del acuerdo de iniciación y el siguiente trámite, la notificación de la propuesta de resolución.

Si tenemos en cuenta que la notificación del acuerdo de iniciación se practicó el 11 de marzo de 1999, y la notificación de la propuesta de resolución se practicó mediante publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de fecha 23 de diciembre de 1999, siendo dicha propuesta de resolución, de fecha 18 de noviembre de 1999, resulta un plazo superior a los 6 meses previstos para la caducidad en el ya mencionado art. 18.3 del R.D. 1945/1983, de 22 de junio.

Tercero. En base a lo expuesto no procede entrar en el fondo del asunto, teniendo en cuenta que al apreciarse la caducidad del expediente no ha lugar a ello.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Secretaría General Técnica

RESUELVE

Estimar el recurso de alzada interpuesto por doña Ana María Fernández Torres, en nombre y representación de la entidad "Habitad", contra Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria en Málaga, de fecha referenciada, revocando la misma en todos sus términos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sevilla, 1 de abril de 2002. El Secretario General Técnico. P.D. (Orden de 18.6.01). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 23 de mayo de 2002.- El Secretario General Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2002, de la Secretaría General Técnica por la que se notifica la resolución adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso de alzada interpuesto por don Rafael Soriano Montoro, en representación de Tuinfor. Grupo Eninfes, SL, contra otra dictada por el Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria en Granada, recaída en el Expte. núm. 257/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal al recurrente «Tuinfor. Grupo Eninfes, S.L.», de la resolución adoptada por el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación al recurso administrativo interpuesto contra la dictada por el Ilmo. Sr. Delegado de la Consejería de Trabajo e Industria en Granada, por la presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«Vistos los recursos de alzada interpuestos por don Rafael Soriano Montoro, actuando en nombre y representación de

“Tuinfor. Grupo Eninfes, S.L.”, contra las Resoluciones de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria de Granada, de fechas 8 y 9 de febrero de 2000, recaídas en el expediente sancionador 257/99, instruido por infracción en materia de protección al consumidor, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria de Granada dictó las Resoluciones de referencia, por las que:

1. En la de fecha 8 de febrero de 2000, se impone a “Tuinfor. Grupo Eninfes, S.L.”, una sanción de trescientos euros cincuenta y un céntimos (300,51 euros), es decir, cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.), como responsable de infracción administrativa calificada de leve de conformidad con el artículo 3.3.6 del Real Decreto 1945/83, de 22 de junio por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con los artículos 2 y 4.1 del Decreto 171/89, de 11 de julio, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios en Andalucía; por los siguientes hechos: “En Inspección de Consumo de la Delegación se levantó acta núm. 169/99, y de la que la empresa tiene copia, de fecha 25 de enero, al establecimiento Tuinfor se constató:

- Se comprueba que en el establecimiento no existe letrero anunciando la disponibilidad de hojas de reclamaciones, y solicitadas dichas hojas no se entregan a la inspección actuante”.

2. En la de 9 de febrero de 2000, se deniega la certificación de caducidad del procedimiento sancionador.

Segundo. Contra las anteriores Resoluciones, don Rafael Soriano Montoro, actuando en nombre y representación de “Tuinfor. Grupo Eninfes, S.L.”, interpone en tiempo y forma recursos de alzada, en los que alega, en síntesis:

1. En el de 20 de marzo de 2000:

- Indefensión. El expediente sancionador se tramita de conformidad con lo establecido en el R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

- Caducidad del expediente sancionador en virtud del art. 18.3 del Real Decreto 1945/83, por el transcurso del plazo de seis meses desde la notificación del Acuerdo de Inicio a la notificación de la Propuesta de Resolución.

2. En el de 22 de marzo de 2000:

- Reitera lo manifestado en escrito presentado frente al Acuerdo de Iniciación. La Delegación de la empresa ubicada en Granada fue aperturada a finales del año 1998 por lo que a la fecha de la inspección era de muy reciente inauguración. Reconoce la inexistencia de las hojas de reclamación en ese momento.

- Falta de intencionalidad, buena fe y predisposición en subsanar la carencia, adquiriendo al día siguiente de la inspección las mentadas hojas, cosa que fue acreditada en su momento.

- Subsidiariamente, falta de proporcionalidad entre el hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. Imposición de la sanción en su grado mínimo.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, por delegación del Consejero, para conocer y resolver los presentes recursos, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías; el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación, modificado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo, y la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se delegan competencias en diversas materias en los órganos de la Consejería.

Segundo. El recurrente está legitimado para la interposición de los presentes recursos, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero. Se considera prioritario, para la resolución de los recursos planteados, el análisis acerca de la alegada caducidad del expediente. En la Disposición Adicional Primera de la Ley 4/1999, de 13 de enero (que modifica la Ley 30/1992, de 26.11.1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) titulada “simplificación de procedimientos”, se establece que:

“El Gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, establecerá las modificaciones normativas precisas en las disposiciones reglamentarias dictadas en la adecuación y desarrollo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común...”

Por su parte, la Disposición Transitoria Primera, sobre “Subsistencia de normas preexistentes”, dispone que:

1. Hasta tanto se lleven a efecto las previsiones de la Disposición Adicional Primera de esta Ley, continuarán en vigor, con su propio rango, las normas reglamentarias existentes y, en especial, las aprobadas en el marco del proceso de adecuación de procedimientos a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como las dictadas en desarrollo de la misma, en cuanto no se opongan a la presente Ley.

2. En todo caso, cuando las citadas normas hayan establecido un plazo máximo de duración del procedimiento superior a los seis meses, se entenderá que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución será precisamente de seis meses, con las excepciones previstas en el apartado segundo del artículo 42.

Dentro del proceso de adecuación de procedimientos a la Ley 30/1992, la Comunidad Autónoma de Andalucía dictó el Decreto 139/93, de 7 de septiembre. En el párrafo segundo de su Artículo Único, en relación con el ordinal 9 del Anexo II, disponía que el plazo máximo de resolución era de un año. Al establecer un plazo de un año (superior a 6 meses de la citada D.T. 1.^a, 2), el plazo máximo para resolver y notificar la resolución recurrida para los expedientes incoados después del 14 de abril de 1999 (fecha de entrada en vigor de la Ley 4/1999) será precisamente de seis meses.

En consecuencia, teniendo en cuenta que el Acuerdo de Iniciación se dictó después de entrada en vigor la reforma de la Ley (14.4.1999), siendo de fecha 18 de junio de 1999, y las Resoluciones finales del expediente se notificaron al inte-

resado el 7 de marzo de 2000, se observa que el plazo de seis meses ha transcurrido, por lo que la caducidad del procedimiento se ha producido.

Cuarto. A su vez, en el artículo 18 del R.D. 1945/1983, por el se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de producción agroalimentaria, se contemplan dos tipos de caducidad que se corresponden a las previstas en los apartados 2 y 3 del citado artículo. Este último dispone: "Iniciado el procedimiento previsto en los artículos 133 a 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo y transcurrido seis meses desde la notificación al interesado de cada uno de los trámites previstos en dicha Ley, sin que se impulse el trámite siguiente, se producirá la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones, salvo en el caso de la resolución, en que podrá transcurrir un año desde que se notificó la propuesta."

Del examen del expediente se desprende que iniciado el procedimiento sancionador mediante acuerdo de fecha 18 de mayo de 1999, notificado el 11 de junio de 1999, y siendo la Propuesta de Resolución de 22 de noviembre de 1999, notificada según copia de acuse de recibo que obra en el expediente el 23 de diciembre de 1999, se comprueba que el plazo de seis meses establecido en la normativa referida ha transcurrido. Procede, en consecuencia, estimar el recurso interpuesto, anulando la resolución recurrida, por caducidad del procedimiento sancionador instruido.

Quinto. Por consiguiente, apreciada la caducidad, no procede entrar a valorar el fondo de las alegaciones presentadas ya que, por una parte, en la fecha en que se notificó la Propuesta de Resolución había transcurrido el plazo de seis meses conforme al artículo 18.3 del R.D. 1945/83, de 22 de junio; y, por otra, en la fecha en que se notificó la Resolución había transcurrido el plazo de seis meses conforme a la normativa anteriormente citada.

Vistos, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía; el R.D. 1945/83, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria; el Decreto 171/89, de 11 de julio; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto; Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, y demás disposiciones concordantes y de general aplicación, esta Secretaría General Técnica

RESUELVE

Estimar los recursos de alzada interpuestos por don Rafael Soriano Montoro, actuando en nombre y representación de "Tuinfor. Grupo Eninfes, S.L.", contra las Resoluciones de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria de Granada, de fechas 8 y 9 de febrero de 2000, recaídas en el expediente sancionador 257/99, instruido por infracción en materia de protección al consumidor, revocando las resoluciones recurridas, dejando sin efecto la sanción impuesta.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sevilla, 9 de abril de 2002. El Secretario General

Técnico, P.D. (Orden de 18.6.01). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 23 de mayo de 2002.- El Secretario General Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2002, de la Dirección General de Administración Local, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Siles (Jaén) para que enajene cinco viviendas de sus bienes de propios a los vecinos ocupantes de las mismas.

Ha tenido entrada en esta Dirección General de Administración Local escrito del Ayuntamiento de Siles (Jaén) solicitando la autorización para enajenar cinco viviendas de sus bienes de propios a los adjudicatarios de las mismas.

Las viviendas objeto de enajenación son las que se relacionan a continuación:

1. Vivienda sita en C/ 3.º, Travesía Carrascal, número 2, a favor de doña Encarnación Frías Martínez, por el precio de 24.112,01 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orcera, a nombre de este Ayuntamiento, Tomo 719, Libro 87, Folio 166, Finca Registral núm. 3.528. Tiene una superficie de 105,92 m².

2. Vivienda sita en C/ 3.º, Travesía Carrascal, número 4, a favor de doña Aurelia Calzada Muñoz, por el precio de 24.798,65 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orcera, a nombre de este Ayuntamiento, Tomo 719, Libro 87, Folio 166, Finca Registral núm. 3.528. Tiene una superficie de 122,09 m².

3. Vivienda sita en C/ 3.º, Travesía Carrascal, número 6, a favor de doña Julia García Salas, por el precio de 25.011,41 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orcera, a nombre de este Ayuntamiento, Tomo 719, Libro 87, Folio 166, Finca Registral núm. 3.528. Tiene una superficie de 124,15 m².

4. Vivienda sita en Avda. Dr. Vigueras, número 61, a favor de don Benito Luque Mérida, por el precio de 26.834,05 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orcera, a nombre de este Ayuntamiento, Tomo 719, Libro 87, Folio 166, Finca Registral núm. 3.528. Tiene una superficie de 129,94 m².

5. Vivienda sita en Avda. Dr. Vigueras, número 63, a favor de don Tiburcio Biedma Robles, por el precio de 26.016,78 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orcera, a nombre de este Ayuntamiento, Tomo 719, Libro 87, Folio 166, Finca Registral núm. 3.528. Tiene una superficie de 127,04 m².

Dicha solicitud se acompaña de la correspondiente documentación, siendo especialmente significativa la que acredita la posesión pacífica y continuada de los ocupantes de las viviendas objeto de enajenación por un tiempo superior a dos años, así como su residencia efectiva.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos ocupa está representada por la Disposición Adicional Primera de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la se que aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas que señala que «Las Entidades Locales que no hayan enajenado directamente los inmuebles de su propiedad en el plazo señalado en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, podrán enajenar directamente desde la finalización del plazo establecido en la citada Ley hasta el 31 de diciembre del año 2002, en los siguientes supuestos: